

C.A. de Santiago

Santiago, veintidós de noviembre de dos mil veintidós.

Vistos:

Primero: Que Aguas Araucanía S.A., apela de la sentencia de doce de agosto de dos mil diecinueve, dictada en los autos Rol N°C-25.228-2018, seguidos ante el 14° Juzgado Civil de esta ciudad que rechazó la reclamación deducida en contra de la Resolución Exenta N° 2579, de fecha 30 de julio de 2018, dictada por el Superintendente de Servicios Sanitarios, que la condenó al pago de las multas que en total ascienden a 71 UTA de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 11 letras a), b) y c) de la Ley N°18.902, por la discontinuidad del servicio de distribución de agua potable en el sector del Fundo El Carmen el 14 de enero de 2017, afectándose a la generalidad de la población abastecida en dicho predio y no haber dado cumplimiento a las instrucciones contenidas en el Ord. SISS N° 3459/08; con costas.

Segundo: Que el recurso de apelación se funda en tres tipos de infracciones.

En primer lugar, la vulneración del artículo 11 letra a) de la Ley N°18.902, la que hace consistir en que la resolución impugnada le imputa el cargo consistente en haber incurrido en “conductas que importan deficiencias en la calidad y continuidad del servicio de agua potable para el sector de Fundo el Carmen, en Temuco, durante el día 14 de enero de 2017, según se detalla en los considerandos de esta resolución”, en los que se señala que tal falla no se trataría de un hecho aislado, puesto que la cañería ya había presentado otra cercana –a unos 40 metros de distancia- en diciembre del año 2016, y otras fallas entre los años 2013 y 2015, todos los cuales provocaron un corte de agua potable para todo el sector del mencionado fundo. Asimismo, en el Ord. SISS N° 977 de 8 de febrero de 2013, se precisó a su parte que tomara todos los resguardos pertinentes, ya que nuevas fallas en esta matriz no serían consideradas como fuerza mayor. Agregando que los



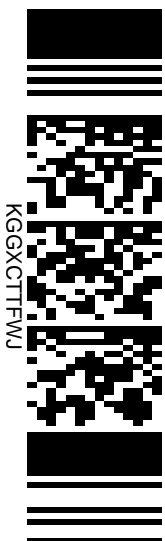
antecedentes permitirían concluir que “la mencionada matriz ha sufrido un número importante de fallas de similares características, originadas por una mala mantención de las conducciones, lo que ha terminado por afectar recurrentemente la continuidad de los servicios que la empresa se encuentra obligada a prestar”.

Al respecto, hace presente que el Fundo El Carmen fue incorporado a su territorio operacional a contar del año 2011, de modo que sólo es responsable de garantizar la continuidad y calidad de los servicios en dicho sector, a partir de ese año y no antes, por lo que tampoco puede afectarle un historial de supuestas fallas anteriores.

Aduce que las consideraciones de la autoridad sectorial en la resolución y ordinario referidos, constituyen una abierta infracción al debido proceso, pues representan un juicio anticipado de culpabilidad, privándola del derecho a alegar fuerza mayor, por lo que carecen de validez y legalidad.

Además, sostiene que no existe sustento normativo que permita a la Superintendencia del ramo establecer parámetros objetivos y previamente regulados para calificar que las fallas se originan por una mala mantención de las conducciones, siendo el instrumento idóneo para garantizar la continuidad y calidad de los servicios de distribución de agua potable el Programa de Desarrollo, de conocimiento y aceptación previa por parte de la mencionada autoridad. De modo que lo que ésta debió hacer era pedir la modificación del Programa que había autorizado, ejerciendo el derecho y/obligación regulado en el artículo 58 del DFL MOP 382/88; lo que no hizo.

Cuestiona los hechos imputados, argumentando que se le sanciona por lo ocurrido el 14 de enero de 2017, pero que en realidad la sanción se extiende a otros anteriores, realizando una serie de apreciaciones subjetivas, que no se fundan en sustratos reales y objetivos, además de concurrir elementos eximentes de responsabilidad, puesto que lo ocurrido correspondió a un hecho fortuito, imprevisible e imposible de resistir, ya que nada podía presagiar una falla respecto de una conducción alimentadora de tan



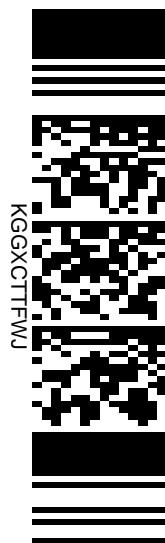
solo 23 años, es decir, con sólo un 50% de vida útil, no existiendo norma que estatuya la obligación de tal mantención que se le impone.

En segundo lugar se denuncia la infracción al artículo 11 letra b), al imputársele que “el corte en el suministro de agua potable se produjo con afectación a la generalidad de los usuarios dependientes de dicha conducción primaria”, pues tal cargo resulta improcedente, ya que el Fundo el Carmen, corresponde a un sector contiguo a la ciudad de Temuco y juntos pertenecen al territorio operacional que Aguas Andina explota en la IX Región de la Araucanía, lo que representa un 4% del total de clientes de Temuco, de manera que no puede concluirse que se haya afectado a la generalidad de los usuarios, concepto que se encuentra determinado en función del territorio operacional o zona de concesión en la que se prestan los servicios, conforme a lo dispuesto por el artículo 5 del DFL MOP 382788, en relación al 53 del mismo texto normativo.

En tercer término se acusa infracción al artículo 11 letra c) de la Ley N°18.902, al concluirse que la empresa incurrió en incumplimiento de las instrucciones contenidas en el Ord. 3459/2008 para la atención de usuarios en casos de cortes no programados, al no poner a disposición todos los recursos disponibles para otorgar suministro alternativo de agua potable, en circunstancias que no se cumplieron los requisitos que la misma disposición legal estatuye, en cuanto a serle exhibida y notificada. Además, sostiene que si se desplegaron los recursos suficientes para enfrentar la emergencia que le eran exigibles como entrega de agua potable a través de camiones aljibe y su información a la comunidad.

Solicita que se revoque la sentencia y se acoja la reclamación, dejándose sin efecto la Resolución N°2579 que la sancionó al pago de las multas que en la misma se indican y se condene en costas a la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Tercero: Que la resolución materia de la reclamación fue dictada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que en

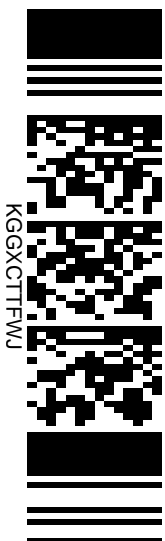


ejercicio de sus facultades dispuso antes el inicio del procedimiento administrativo de sanción y formuló cargos en contra de Aguas Araucanía S.A. con ocasión a lo acontecido el 14 de enero de 2017, en que se produjo un corte de suministro de agua potable en el sector del Fundo El Carmen, Temuco, la que habría tenido su origen en la rotura de una matriz, única y exclusiva infraestructura que abastece de agua potable a esa zona, es decir, a 4.341 clientes que representan más de 16.000 habitantes, sancionándola finalmente por incurrir en las infracciones, ya indicadas. Tal determinación fue objeto de una reclamación judicial, la que se desestimó y es objeto de apelación en esta sede.

Cuarto: Que, la sentencia apelada, que desestimó la reclamación interpuesta tiene presente que el artículo 35 del Decreto con Fuerza de Ley Nro. 382, del Ministerio de Obras Públicas, que contiene la Ley General de Servicios Sanitarios, en su inciso primero, señala que “El prestador deber garantizar la continuidad y la calidad de los servicios, los que sólo podrán ser afectadas por causa de fuerza mayor”; indicando el inciso segundo que “Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, podrá afectarse la continuidad del servicio, mediante interrupciones, restricciones y racionamientos, programados e imprescindibles para la prestación de éste, los que deberán ser comunicados previamente a los usuarios”

Señala que es obligación del prestador del servicio garantizar la continuidad y calidad del mismo a los usuarios del sistema, pudiendo eximirse de dicha responsabilidad probando la concurrencia de alguna causal eximente, cuestión que, no ocurre en la especie.

Agrega que no habiendo la reclamante reconocido la discontinuidad en el servicio de distribución de agua potable en el sector Fundo El Carmen el día 14 de enero de 2017, lo que resulta corroborado por las demás probanzas rendidas, se concluye que Aguas Araucanía es responsable del hecho sancionado por la Superintendencia del ramo.



Añade que habiéndose constatado que se afectó a la generalidad de los usuarios del sector Fundo El Carmen, sin que esto fuera desvirtuado por la empresa de servicios sanitarios por lo que tiene por acreditada tal circunstancia.

A su vez, cita el Ordinario SISS Nro. 3.459/2008 que expresa lo siguiente: “2.1. En caso de cortes no programados, la concesionaria debe ajustarse a lo instruido en el art. 122 del D.S. 1199, aplicando el procedimiento especial para la atención de emergencias, el que debe ser público. Las empresas deben estimar el tiempo de reposición del suministro e informarlo a la brevedad a los clientes afectados (casa a casa o medios de comunicación masivo). En caso que el o los cortes no programado se extiendan más del tiempo estimado, se debe actualizar la información a los clientes afectados, complementándola con la ubicación de los puntos de reparto de agua potable, si correspondiere”. En el 2.4 que dispone que “Todos los cortes no programados que afecten a más de 1000 clientes deben ser comunicados al Jefe de la Oficina Regional por el teléfono fijo o móvil y posteriormente por correo electrónico, para registro, al mismo tiempo, en que dicha concesionaria tome conocimiento de la situación (ya sea su ocurrencia durante día hábil, inhábil y en cualquier horario). Todos los cortes que afecten hasta 1000 clientes deberán ser informados diariamente al jefe de la oficina regional vía electrónica. Asimismo, la empresa deber evaluar la necesidad de dar aviso a las autoridades locales conforme a la magnitud del mismo (Intendencia, Gobernación, municipio, bomberos, carabineros, etc.)”; concluyendo que Aguas Araucanía incumplió las instrucciones transcritas, sin que la misma hubiere desacreditado los hechos en los cuales se sustentaron las infracciones cursadas, por lo que se tendrá por cierta tal circunstancia.

Quinto: Que el fallo impugnado desestimó las alegaciones de la reclamante -mismas que fueron materia de los descargos efectuados en sede administrativa- y que se reiteran en la apelación deducida.

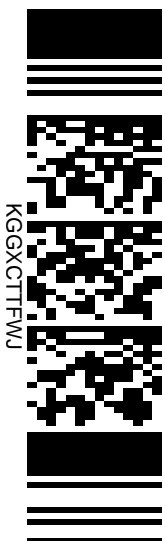


En efecto, en el motivo quincuagésimo séptimo, se concluye que dicha parte no acreditó los presupuestos fácticos en que sustentó la existencia del hecho de fuerza mayor que invocó en su defensa, de modo que no es posible acoger tal eximente. Además, refiere que la sanción impuesta por la Superintendencia del ramo, no se extendió más que a la falta que tuvo lugar el 14 de enero de 2017, pues la mención a situaciones anteriores, pero siempre posteriores al año 2011, es meramente referencial, a fin de hacer presente que no obedeció a un hecho aislado o situación excepcional, sin que se castigue una conducta de reiteración o por falta de mantenimiento de las redes respectivas.

En los motivos siguientes se descarta el argumento de exculpación fundado en la revisión de programas por la autoridad, dado que se trató de un hecho único y que afectó al Fundo El Carmen, los que en todo caso tampoco fueron acompañados, lo que excluye cualquier consideración a su respecto. También desestima la imputación de falta a los deberes de fiscalización por la autoridad sectorial por no tener relación alguna con el hecho generador de la culpa infraccional imputada a la reclamante.

Luego en el motivo quincuagésimo noveno de la sentencia impugnada, se señala que la interpretación de la Superintendencia en la Resolución 2579, es correcta al tratarse el sector afectado de uno alimentado por una única matriz, debiendo ser considerado de manera independiente a los demás en que Aguas Araucanía distribuye agua potable, pues tal conclusión no contradice la normativa que cita la actora, ya que sólo acotó la zona de concesión o territorio operacional de la reclamante en razón de la infraestructura de distribución del sector, entendiendo por lo demás que el concepto de generalidad se asimila al de mayoría y no de totalidad.

Asimismo, se descarta la alegación sobre suministro alternativo de agua potable porque esta fue acogida por la Superintendencia del ramo y no se sancionó a la reclamante por esto, sólo por no haber informado a tiempo a los usuarios respecto del tiempo estimado de reposición.



Sexto: Que esta Corte comparte las consideraciones del fallo de primer grado, referidas en el motivo precedente y que constituyen el sustento fáctico y jurídico de la conclusión a la que arriba en orden a tener por configuradas las infracciones por las cuales la reclamante fue sancionada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, desestimándose las alegaciones que la primera formuló en esta sede mediante la reclamación judicial impetrada.

En este sentido y tal como lo concluye el sentenciador a quo, a Aguas Araucanía S.A. le cabe responsabilidad en los hechos materia de la investigación y proceso sancionatorio incoado a raíz de los hechos ocurridos el 14 de enero de 2017, consistentes en la discontinuidad del servicio de distribución de agua potable en el sector de El Fundo El Carmen, al no haberse acreditado la existencia de fuerza mayor alegada, lo que afectó a la generalidad de la población abastecida en dicho predio, pues se trató de un hecho que tuvo repercusiones en la generalidad de la población del sector bajo responsabilidad de la empresa reclamante y no haber dado debido cumplimiento a las instrucciones contenidas en el Ord. SISS N°3459/08.

Séptimo: Que, conforme a lo razonado, se concluye que las infracciones que dieron inicio al procedimiento en contra de Aguas Araucanía S.A., se encuentran debidamente acreditadas y sancionadas, no configurándose ninguna de las ilegalidad denunciadas por el recurso intentado.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto por el artículo 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, **se confirma** la sentencia apelada de doce de agosto de dos mil diecinueve, dictada por el 14° Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol N° C 25.228-2018.

Regístrese y comuníquese.

N°Civil-12372-2019.

Pronunciada por la Novena Sala, presidida por integrada por la ministra señora Carolina Brengi Zunino e integrada además, por la



ministra (S) señora Lidia Poza Matus y el abogado integrante señor Michael Camus Dávila.

En Santiago, veintidós de noviembre de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.



Pronunciado por la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministra Carolina S. Brengi Z., Ministra Suplente Lidia Poza M. y Abogado Integrante Michael Christian Camus D. Santiago, veintidós de noviembre de dos mil veintidós.

En Santiago, a veintidós de noviembre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

